

**REPUBLICA DE COLOMBIA**



**JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Bucaramanga, nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

**ASUNTO**

Estudiar el permiso de 72 horas solicitado por el sentenciado **MAURICIO NUÑEZ ALARCON** identificado con la cédula de ciudadanía número **91.353.076**.

**ANTECEDENTES**

- Este despacho vigila la pena impuesta al **MAURICIO NUÑEZ ALARCON** el 21 de octubre de 2020 por el **JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA** por un quantum de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN**, por haber sido hallado responsable de del delito de **TRAFICO, FABRICACIÓN, PORTE O TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES**, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
- Se tiene conocimiento que el condenado **MAURICIO NUÑEZ ALARCON** se encuentra privado de la libertad por cuenta de estas diligencias desde el 11 de mayo de 2020 actualmente **CPMS BUCARAMANGA**
- Ingresas el expediente al despacho para resolver solicitudes de permiso administrativo de 72 horas elevadas por el sentenciado.

**CONSIDERACIONES**

Entra el Juzgado a establecer la viabilidad o no del beneficio administrativo de las 72 horas, deprecado en favor de **MAURICIO NUÑEZ ALARCON**, mediante el análisis y valoración de los elementos fácticos y el acopio probatorio obrante en el expediente, así como de los presupuestos normativos establecidos por el Legislador para tal precepto.

Sea lo primero advertir que este Despacho Judicial es el competente para decidir de fondo lo concerniente al beneficio administrativo del permiso hasta 72 por horas que prevé el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, ello, con base en el principio de la reserva judicial a cuyo tenor se dispone que es un funcionario del mismo orden el encargado de decidir si un condenado puede o no salir en libertad, así sea por breve lapso; de otro lado, el beneficio administrativo implica de por sí, un cambio de las condiciones de cumplimiento de la condena como lo ordena el artículo 38 de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, el máximo Tribunal Constitucional ha fijado por vía jurisprudencial el conducto regular a seguir, y precisado cual es el funcionario competente para

decidir esta clase de situaciones jurídicas mediante sentencia T 972 de 2005 <sup>1</sup>, radicándose en cabeza de estos Juzgados ejecutores de la pena.

En ese entendido y al estudiar las previsiones del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 que consagra la figura del permiso administrativo de las 72 horas, se establece que los requisitos a cumplir por parte del peticionario son: estar en la fase de mediana seguridad, haber descontado la tercera parte de la pena impuesta, no tener requerimientos de ninguna autoridad judicial, no registrar fuga ni tentativa de ella durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la pena, haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión, observar buena conducta; requerimientos que deben cumplirse en su totalidad, dadas las implicaciones que ello conlleva para el encartado y para el conglomerado social que la albergará, por eso debe efectuarse un estudio pormenorizado de las diligencias allegadas.

No obstante, previo al análisis de estas exigencias se advierte, que los hechos que dan cuenta la presente vigilancia, tuvieron ocurrencia 11 de mayo de 2020 (fl.52) como claramente se lee en la sentencia, en plena vigencia de la Ley 1709 de 2014 <sup>2</sup>, que excluye de beneficios judiciales y administrativos, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delitos relacionados con el **TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES** y otras infracciones, entre otros; encontrándose entonces inmerso dentro de la prohibición del Inc. 2 del art. 68 A <sup>3</sup> de la ley 599 de 2000, que excluye beneficios y subrogados penales cuando la persona haya sido condenada por los delitos que allí se relacionan, precisando que la conducta por la que fue condenado el señor **MAURICIO NUÑEZ ALARCON** se encuentra la conducta punible de **TRAFICO, FABRICACIÓN, PORTE O TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES**.

<sup>1</sup> "De manera que por disposición legal, que ha suscitado además de pronunciamientos jurisprudenciales, la competencia para decidir acerca de los beneficios administrativos, que como el de 72 horas tiene la virtualidad de modificar las condiciones de cumplimiento de la condena, está radicada en el juez de penas, lo anterior sin perjuicio de la colaboración armónica que debe existir entre el ejecutivo y la Rama Judicial."

<sup>2</sup> 20 de enero de 2014.

<sup>3</sup> " Art. 68 A.- Adicionado. ley 1142 de 2007, art. 32. Modificado. Ley 1453 de 2011, art.28. Modificado .Ley 1474 de 2011, Art13. Modificado Ley 1709 de 2014, art. 32. " No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva, cuando la persona hay sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores. Inc 2.Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; **DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES**; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal". (negrilla del Juzgado).

Justamente el evento que nos ocupa, se acomoda a la preceptiva legal reseñada en precedencia, en la medida que se solicita el permiso administrativo de 72 horas y uno de los delitos por los que se condenó a **MAURICIO NUÑEZ ALARCON**, es el de **TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, encontrándonos ante una conductas que se encuentra excluida por el legislador como merecedoras de mayor efectividad en el tratamiento penitenciario; por lo que se negará el sustituto penal por expresa prohibición legal.

Es claro que el permiso de 72 horas, es un de beneficio administrativo y no un derecho; al respecto es importante traer a referencia la precisión que frente a los beneficios administrativos ha hecho la H. Corte Constitucional:

*"En cuanto tiene que ver con los beneficios administrativos, se trata de una denominación genérica, dentro de la cual engloban una serie de mecanismos de política criminal del Estado, que son inherentes a la ejecución individual de la condena. Suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que está cumpliendo una condena y que, en algunos casos, pueden implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, dispuesto en la sentencia condenatoria o en una modificación de la condiciones de la ejecución de la condena"<sup>4</sup>.*

Suficientes las consideraciones para denegar por improcedente el beneficio administrativo de las 72 horas, por expresa prohibición legal.

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA**;

**RESUELVE:**

**PRIMERO. NEGAR** a **MAURICIO NUÑEZ ALARCON** identificado con la cédula de ciudadanía número **91.353.076**, el permiso administrativo de las 72 horas por expresa prohibición legal art. 32 de la ley 1709 de 2014.

**SEGUNDO.** Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**HUGO ELEAZAR MARTÍNEZ MARÍN**

**JUEZ**

<sup>4</sup> Sent. C312/02 MP Dr. Rodrigo Escobar Gil.

